

(d) "Institución bancaria"—significa todo banco doméstico o extranjero que haga negocios en Puerto Rico, conforme a las disposiciones de la Ley de Bancos de Puerto Rico.

(e) "Institución financiera"—significa toda persona que se dedica, entre otras actividades, a expedir tarjetas de crédito.

(f) "Persona"—significa persona natural o jurídica.

(h) "Uso ilegal de tarjetas de crédito"—significa el uso de una tarjeta de crédito con el propósito de defraudar al gobierno para obtener bienes y servicios gubernamentales que legítimamente no pertenezca a la persona que la usa, o para pagar préstamos, deudas gubernamentales y otros, a sabiendas o con motivos fundados para creer que:

(1) la tarjeta es hurtada o falsificada;

(2) la tarjeta ha sido revocada o cancelada; y

(3) el uso de la tarjeta de crédito no está autorizad[o] por cualquier razón.

Artículo 2.—Se autoriza a todas las agencias e instrumentalidades gubernamentales, la Administración de los Tribunales y a los municipios que ofrezcan servicios, reciban pagos o cobren deudas por concepto de préstamos, contribuciones, licencias, patentes, arbitrios, multas, penalidades, recargos e intereses y otros, a recibir el pago con cargo a una tarjeta de crédito que haya sido expedida por el emisor a nombre del tenedor y aceptada por éste.

Artículo 3.—Toda persona que haga uso ilegal de una tarjeta de crédito, para los propósitos de esta ley, incurrirá en delito grave y será sancionada de acuerdo a la pena dispuesta en el Artículo 269 del Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Artículo 4.—La aceptación de una tarjeta de crédito como forma de pago a tenor con lo dispuesto en esta ley no liberará al deudor de su obligación de pagar la deuda contraída hasta tanto la misma haya sido totalmente satisfecha y finiquitada por el emisor de la tarjeta, según se define éste en el Artículo 1 precedente.

Artículo 5.—El Departamento de Hacienda preparará la reglamentación necesaria para implementar esta ley. El Secretario de Hacienda preparará la reglamentación para las agencias cuyos fondos están bajo la custodia del Departamento de Hacienda y para los pagos por conceptos contributivos. Todo lo concerniente a la forma en que serán compensadas las instituciones bancarias y financieras debe ser parte integrante del Reglamento.

Artículo 6.—Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación a los únicos efectos de su Artículo 4 y las restantes disposiciones comenzarán a regir a los 120 días.

Aprobada en 11 de agosto de 1995.

Ley Notarial—Definición de Testimonio; Enmienda

(P. de la C. 643)

(Sustitutiva)

[NÚM. 156]

[Aprobada en 11 de agosto de 1995]

LEY

Para derogar las Secciones 1 y 3 de la Ley de 12 de marzo de 1908; enmendar el Artículo 56 de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico", a los fines de aclarar la definición de testimonio o declaración de autenticidad en la Ley Notarial de Puerto Rico.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con el propósito de agrupar en un solo estatuto todo lo relacionado al notariado puertorriqueño, de manera que se simplifique su codificación, estudio y lectura, se propone la presente enmienda a la ley Notarial de Puerto Rico, Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, en su Artículo número cincuenta y seis (56).

La enmienda propuesta recodifica dentro de la Ley Notarial de Puerto Rico las Secciones 1 y 3 de la Ley de 12 de marzo de 1908, para aclarar que el affidavit es un testimonio o declaración de autenticidad. Dichas tres expresiones constituyen sinónimos entre sí y equivalen y significan lo mismo de conformidad a nuestra Ley Notarial y la jurisprudencia interpretativa representada por el caso de *Rodríguez Vidal v. Benvenuti*, 115 D.P.R. 583 (1984), toda vez que los affidávits o "declaraciones de autenticidad" reciben igual consideración legal.

El affidavit, como declaración formal de autenticidad es un género que comprende tres modalidades: (1) la autenticidad o reconocimiento de una firma sin que haya un juramento del declarante; (2) la

autenticidad de un juramento o declaración jurada; y (3) la autenticidad de otro hecho, acto o contrato. Dichas tres constituyen modalidades jurídicamente válidas.

De igual forma, la enmienda logra el establecer una deseada y más clara definición de testimonio o declaración de autenticidad en la ley Notarial.

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:

Sección 1.—Se derogan las secciones 1 y 3 de la Ley de 12 de marzo de 1908.⁴⁷⁶

Sección 2.—Se enmienda el primer párrafo del Artículo 56 de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, conocida como “Ley Notarial de Puerto Rico”, para que se lea como sigue:⁴⁷⁷

“Llámesse testimonio o declaración de autenticidad al documento mediante el cual un notario a requerimiento de parte interesada, da testimonio de fe de un documento no matriz, además de la fecha del testimonio [*sic*]: (1) de la legitimación de las firmas que en él aparezcan, siempre que no se trate de los actos comprendidos en los incisos 1 al 6 del Artículo 1232 del Código Civil vigente; (2) de haber tomado juramento por escrito; (3) de que es traducción fiel y exacta de otro, siempre que conozca ambos idiomas y así lo certifique el propio testimonio; (4) de que es copia fiel y exacta de un documento que no obra en un Protocolo Notarial; (5) o en general, de la identidad de cualquier objeto o cosa.

Sección 3.—Esta ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

Aprobada en 11 de agosto de 1995.

⁴⁷⁶ 4 L.P.R.A. secs. 887 y 889.

⁴⁷⁷ 4 L.P.R.A. sec. 2091.

Negocios de Venta, Alquiler o Entrenamiento de Perros Guardianes, de Vigilancia y Guías—Obtención de Licencia

(P. de la C. 747)

[NÚM. 157]

[Aprobada en 11 de agosto de 1995]

LEY

Para exigir a los propietarios, operadores o entrenadores que operan negocios dedicados a la venta, alquiler o entrenamiento de perros guardianes dedicados a la protección de propiedades industriales, comerciales y residenciales; entrenamiento en detección de drogas narcóticas y explosivos; entrenamiento para vigilancia preventiva y protección personal, a que obtengan una licencia emitida por el Departamento de Agricultura, que los cualifique y autorice a ejercer como operadores y entrenadores de perros guardianes, guías protectores y de seguridad y reglamentar tales prácticas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Puerto Rico, al igual que muchos países del mundo, enfrenta el serio problema de la criminalidad combatiéndolo ardua y vigorosamente con los recursos a su alcance, no obstante, siendo un problema de tan profundo arraigo su erradicación cada día se ve más lejana. La ciudadanía en su afán de protección y seguridad utiliza métodos de seguridad tan comunes como las rejas con sus consabidos candados o cadenas, así como métodos más sofisticados como la utilización de complicados sistemas electrónicos de alarmas o la contratación de servicios de patrullas de vigilancia vecinal. No se debe olvidar al guardia de seguridad privado quien da vigilancia personal a la propiedad industrial, al negocio comercial, al condominio de residentes o las urbanizaciones cerradas. Y por último, tenemos la utilización del perro de seguridad o centinela, el cual, debidamente entrenado, puede ofrecer un servicio excelente en la labor de protección y seguridad a las propiedades y vidas humanas.

En Puerto Rico existe una cantidad razonable de negocios que se dedican a dar entrenamiento a perros para distintos fines ya sea para dedicarlos a la protección de propiedades industriales, comerciales y residenciales; entrenamientos de obediencia; entrenamiento en detección de drogas narcóticas y explosivos; entrenamiento de